

CRISIS DEL ESTADO E INTERVENCIÓN INTERNACIONAL EN HAITÍ

Gérard Pierre-Charles

RESUMEN

El artículo presenta claves para comprender la compleja y dramática trama social y política de Haití. A partir de la coyuntura de desgarramiento político que dio lugar a la reciente caída de Bertrand Aristide como presidente, el autor hace un análisis de los factores de la profunda crisis de Estado del país caribeño. Entre éstos desataca el proceso de corrupción del gobierno, cuyo líder había tenido amplio apoyo popular a principios de los años noventa. Además, analiza el papel de la "intervención extranjera" tanto en la coyuntura de crisis abierta como durante el gobierno, y también el papel de los sectores democráticos de la sociedad civil agrupados en "Plataforma Democrática".

SUMMARY

The article presents keys for understanding the complex and dramatic social and political development of Haiti. Starting from the conjuncture of political strife that led to the recent fall of Bertrand Aristide as president, the author analyses the elements of the profound crisis of the state in the Carribean country. Among these he emphasises the process of corruption of the government, whose leader had enjoyed wide popular support at the beginning of the nineties. He also analyses the role of "foreign intervention" both in the conjuncture of open crisis and during the government, and of the democratic sectors of civil society grouped in the "Democratic Platform".

El 29 de febrero de 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU, respondiendo a una solicitud formulada por el presidente Boniface Alexandre, recientemente instalado en lugar de M. Aristide, dimisionario, autorizaba, por la Resolución 1559, el envío a Haití de una fuerza multinacional.

Por esta misma Resolución, el Consejo disponía el reemplazo, a partir del 1 de junio, de esta fuerza por una "Misión Internacional de Estabilización", cuyo mandato y duración serían definidos posteriormente, en un plazo de 60 días.

Esta Resolución recibía el acuerdo unánime de los miembros del Consejo reunidos bajo la presidencia de la República Popular de China que, de manera inusitada, daba apoyo, en el seno del Consejo de Seguridad, a una intervención directa de tropas extranjeras en un Estado miembro.

Esta Resolución referida a Haití cobraba así un carácter especial, ya que no correspondía a una situación clásica susceptible de provocar tal acción. Sin embargo, había sido precedida por un despliegue publicitario sin precedente en que la televisión del mundo entero mostraba imágenes poco usuales de violencia represiva y de acciones armadas, particularmente en Gonaïves, que hacían temer la guerra civil o un verdadero genocidio.

Se realizaba también, en un marco de crisis política de larga duración y de una situación donde por segunda vez en diez años, las Naciones Unidas debían intervenir no para conducir a la paz –ya que no se trata de una situación de guerra– sino para garantizar la seguridad y las condiciones de funcionamiento democrático en un Estado miembro.

Tratándose de un país de América Latina y, además, de una vieja República independiente, esta intervención no podía dejar de llamar la atención de analistas y observadores sobre sus causas profundas. Sobre todo cuando este *dossier* le correspondía a la OEA que tenía como mandato, desde la Cumbre de las Américas en Québec en 2001, dar seguimiento al contencioso entre la oposición política y el gobierno de Haití, en especial cuando este país, durante este año trágico, celebraba sus 200 años como nación independiente.

CRISIS DEL ESTADO

La decisión adoptada por el organismo internacional parecía corresponder al reconocimiento del "derecho de injerencia" preconizado desde algunos años por algunos Estados como propio para enfrentar situaciones

excepcionales de crisis y de incapacidad por parte del Estado de asumir el poder o de enfrentar un conflicto agudo. Correspondía a lo que parecía ser una situación susceptible de desembocar en el caos o en una virtual guerra civil. Las imágenes de varios grupos armados, ampliamente difundidos a escala internacional, llevaba a los reporteros a precipitarse hacia Haití para “contemplar” las escenas de “la Armada caníbal” y otros espectáculos de sangre.

En el plano diplomático, la Organización de las Naciones Unidas había sido suficientemente informada de los antecedentes de este verdadero colapso como para sentirse involucrada. En efecto, en 1994, había intervenido en Haití para suplantar a las fuerzas de Estados Unidos de alrededor de 20 mil hombres que habían desembarcado en el marco de la misión de “restauración de la democracia”, patrocinada directamente por el presidente William Jefferson Clinton. Las tropas se quedaron alrededor de dos años, y desde la crisis electoral del año 2000, consecuencia de las elecciones fraudulentas que instalaron una Legislatura y a Aristide mismo en el poder, la OEA y, más recientemente, la CARICOM, han sido parte integrante de las negociaciones y otras intervenciones tendientes a normalizar el panorama político. Estas instituciones y otras mantenían al Secretariado General ampliamente informado de las violaciones de los derechos humanos por el régimen de Puerto Príncipe, de las dificultades en la búsqueda de un compromiso entre el poder y la oposición y del deterioro de la situación en términos de gobernabilidad, del respeto de las reglas del Estado de derecho y del agravamiento de las condiciones de vida económica y social de la población.

La degradación acelerada del clima político, a fines del año 2003, con manifestaciones populares masivas y la irrupción en escena de ciertos grupos armados, habían favorecido la argumentación de algunos Estados miembros, particularmente Francia, en pro de la eventual participación de la ONU en una misión humanitaria o de mantenimiento de la paz en Haití. En efecto, la violencia desatada por los *chimères*, hombres *de mano* y los mafiosos al servicio de Aristide ponía a la orden del día la cuestión del “derecho de injerencia”. Los asesinatos y exacciones de toda suerte, en un entorno de aumento de la miseria, se referían al concepto de “pobla-

ción en peligro" para incitar a la acción internacional. Tal decisión emanaba de la sistemática destrucción de las instituciones, la cual alcanzó su expresión más significativa al desmembrarse la Policía nacional, totalmente avasallada y desmoralizada. El Estado se mostró incapaz de asumir las responsabilidades y exigencias del orden democrático.

El Consejo de Seguridad de la ONU podía referirse a las amenazas que implicaba tal situación para las vidas y los bienes y, además, a los peligros que representaba Haití para la "Seguridad de la región". Un clima de fin de reinado nacía de la combinación de eventos importantes: la creciente movilización de la población (partidos políticos, sociedad civil, estudiantes, etc.) reclamando la salida de Aristide, la presencia inopinada de grupos armados en el norte del país y en la región colindante con República Dominicana, las críticas acerbas de la prensa, el cuestionamiento de la legitimidad del gobierno por ciertas instancias internacionales. La población, en un clima excepcionalmente tenso y frente a las amenazas y peligros creados por las condiciones de la caída de este bárbaro régimen que puso en marcha un plan de represalias, tuvo que asistir, entre desahogo, humillaciones e indignaciones, a la llegada de las tropas extranjeras cuya misión era restablecer el orden.

Tal escenario no era de ninguna manera una innovación. En efecto, en 1915, en un contexto local de violencia y de caos, la infantería de marines de Estados Unidos de América había desembarcado en Puerto Príncipe, y el saldo de esta intervención fue de 19 años de ocupación. Se trataba de "restablecer el orden democrático" en Haití. Esto, en un contexto regional de expansionismo y de injerencia.

Cincuenta años después, en 1965, en un contexto regional de democratización generalizada y en un marco local marcado por un régimen de fuerza instaurado por los militares, las tropas estadounidenses, bajo el patrocinio de Naciones Unidas, habían intervenido con el objetivo de "restaurar la democracia".

Diez años más tarde, el intervencionismo toma la forma de una acción internacional contra el Estado mafioso, generador de terrorismo y de anarquía, que amenazaba realizar un baño de sangre sobre una población pacífica.

En esta continuidad se proyecta como factor permanente la vigilancia de la gran potencia siempre atenta y lista para corregir cualquier desorden en su vecindario. En esta ocasión, sin embargo, tal preocupación era compartida con Francia, que más allá de cualquier actitud competitiva, manifestaba una clara coincidencia de intereses. En el fondo, tal coincidencia parecía corresponder a un imperativo de la globalización. Dado que Haití, debido a su retraso económico y social así como al arcaísmo de su sistema político, constituía una suerte de "disidencia histórica y geográfica" insoportable, según la lógica de esta globalización, recursos adecuados deberían ser movilizados para incorporarla en la normalización de los mercados, de la fuerza de trabajo, de los modos de vida y de los valores contemporáneos. Tal continuidad se refiere, en definitiva, a la crisis del Estado haitiano que, durante el último siglo, no ha podido lograr la adecuación de su estructura, su funcionamiento, sus métodos y sus resultados, a las exigencias del mundo moderno. En el terreno político, económico, social y cultural, el Estado haitiano parece prolongar, hasta el día de hoy, el siglo XIX latinoamericano marcado por la autocracia, el régimen fuerte a ultranza que cierra los ojos a las exigencias de las mayorías, en términos de democracia, justicia, progreso y desarrollo. Este Estado, expresión de una oligarquía precaria (de militares, de hombres de negocios o de políticos), no lograba, a pesar de las influencias del modernismo provenientes del extranjero bajo la forma de capital o de modelo, dirigir la sociedad, ni estimular a las fuerzas motrices susceptibles de asegurar su avance. Sin legitimidad, sin representación real de los productores o de los trabajadores, sin credibilidad entre los ciudadanos, el Estado se mantiene débil en su función de organización de la sociedad y fuerte como opresor, funcionando sobre una base de extorsiones y de violencia.

Este déficit del Estado, de manera repetitiva, provoca pulsaciones en medio de las categorías sociales más avanzadas de una oposición ilustrada, pero sin llegar a revertir el vapor y a generar una dirección política que pueda impulsar la democracia, el desarrollo y el progreso. De ahí, un bloqueo continuo, un empantanamiento interminable, una transición que no acaba. Tal crisis de dirección o, mejor dicho esta crisis de hegemonía, al no poder ser resuelta en términos de desenlace violento de relación de

fuerzas o de compromiso conduce a unos y otros a la tentación de buscar el apoyo de fuerzas extranjeras para rebasar el equilibrio y lograr revertir la situación que la dinámica de las fuerzas locales no permite resolver.

GRADUAL CUESTIONAMIENTO DEL PODER PERSONAL

Jean Bertrand Aristide surgió en la escena política en 1990 como líder de gran popularidad, sobre todo en los medios de los desposeídos. La revancha de los sectores conservadores haitianos tomó la forma de un golpe de Estado. Democráticamente electo, fue alejado del Palacio por tres años durante los cuales vivió en Washington, lugar donde preparó su regreso, el que realizó bajo el auspicio de Estados Unidos y de la ONU.

Diez años después, en 2004, su popularidad y los cambios que anunciaba se han evaporado. Pero, por otro lado, supo utilizar todos los atributos de la democracia para instaurar un poder antidemocrático basado en el asesinato político, la corrupción, el narcotráfico, la utilización de viejos métodos de mentira, de violencia, de simulación y de intimidación.

Tal realidad fue impuesta cada vez más al pueblo, sobre todo a partir de las elecciones del año 2000, las cuales, organizadas de manera ilegal, suscitaron una crisis poselectoral sin fin. Ésta, después de más de tres años de cuestionamiento, de resistencia y de combate democrático conllevó, en última instancia, al derrocamiento de M. Aristide.

De hecho, al regresar del exilio con apoyo amplio de la población y el sostén ilimitado de la comunidad internacional, el ex cura de St-Jean Bosco endureció su impotencia en hacer buen uso de los inmensos recursos que podía disponer. En efecto, la comunidad internacional había afectado una suma de alrededor de 2 mil millones de dólares, en términos de préstamos y donaciones. Este monto esperaba proyectos apropiados para ser puesto a disposición del gobierno y de la población desposeída del país. La mala gestión comprometió esta posibilidad de relanzar la economía y de garantizar el éxito de un proyecto que había suscitado tanta esperanza en los medios populares. Al mismo tiempo, en el plano político, el régimen, en vez de abrirse y de atraer a otras categorías sociales, retomó su línea de conducta demagógica y populista recurriendo cada vez más a la fuerza.

La continuidad de este poder fue asumida por René Préval, quien le sucedió y jugó plenamente el papel de marioneta. Al cumplir al pie de la letra los designios de su tutor, continuó la política de éste de violación de los derechos humanos, de nepotismo, y un juego maquiavélico destinado a garantizarle el regreso.

El rechazo de la ciudadanía a este reino anarco-populista comenzó a manifestarse en ese periodo (1995-2000). Provenía de la Organisation du Peuple en Lutte (OPL), que representaba la rama mejor organizada del movimiento que había apoyado a Aristide. Su representación parlamentaria, con mayoría relativa en la Cámara de Diputados (35 de 83) y en el Senado (9 de 27), impuso al dúo presidencial Aristide/Préval un primer ministro de la oposición: Rosny Smarth, quien fue constantemente hostigado por las jugarretas del Ejecutivo presidencial y de las "organizaciones populares" manipuladas en los pasillos del Palacio.

El Parlamento emprendió frenar las violaciones del orden republicano y otras derivadas del poder absoluto y populista por el cual comenzaba a funcionar el presidencialismo respaldando la impunidad y las exacciones permanentes en contra de los ciudadanos.

Ya, en este nivel, las exigencias de la OPL en favor de la institucionalización, la modernidad, el respeto a la ley y a la Constitución configuraban un polo de atracción para el conjunto de la población. La capacidad de convocatoria de movilización, además de la credibilidad misma del poder se derrumbaban. La propaganda gubernamental se esforzó entonces de atribuir las acciones de la oposición a las influencias provenientes del antiguo régimen duvalierista o de sectores del extranjero.

En abril de 1997 abortó una tentativa del presidente Préval de imponer su voluntad durante las elecciones parciales para el Senado porque la oposición tenía todas las posibilidades de reforzar su mayoría. Las denuncias de la OPL contra este comportamiento antidemocrático surtieron efecto, exigieron respecto a las reglas del juego y alimentaron un vasto movimiento reivindicativo de los sectores populares, cada vez mas desconfiados y críticos frente a las promesas no cumplidas por el poder. Estos sectores, sin embargo, frenados, intimidados, confundidos por los métodos del populismo, tardaban en expresarse en acciones autónomas o pro-

piamente de apoyo a una oposición entonces perseguida y calumniada. A pesar de todo, la tenacidad de esta oposición, la dimisión del primer ministro Smarth y la imposibilidad técnica y política de reemplazarlo, suscitaron apoyo en todo el país así como las acciones de los parlamentarios y otros sectores de la prensa y de instituciones cívicas en favor del respeto del Estado de derecho. Tal situación llevó al presidente Préval a disolver el Parlamento en diciembre de 1998, lo que demuestra la incapacidad de su régimen de poder personal de coexistir con un parlamento independiente. Mostró, asimismo, su negación a aplicar de hecho los prescritos de la Constitución, previendo el funcionamiento de un Ejecutivo bicéfalo conforme a las necesidades del pluralismo.

LABORIOSA EMERGENCIA DE UNA ALTERNATIVA

En el año 2000 parece más evidente la imposibilidad del Estado, corroído por todos los vicios, de garantizar la gestión del país y de cohabitar al mismo tiempo con una oposición democrática. Esta incompatibilidad se hizo notoria en ocasión de la convocatoria y la realización de las elecciones legislativas y presidenciales. En efecto, el conflicto poselectoral a que condujo, expresión de una crisis política y social mucho más profunda, traducía el arcaísmo de las estructuras y de las instituciones así como la naturaleza de las dificultades inherentes al no-desarrollo. Se profundizó a medida que se expresaba la voluntad enfermiza del Ejecutivo de imponer a la nación las alcaldías, un parlamento, un presidente, en fin, de monopolizar al Estado al servicio de un solo hombre.

Los partidos de oposición que tenían todas las posibilidades de ganar las elecciones legislativas fueron despojados de los puestos que obtuvieron, extorsión que se extendió al Poder Judicial y a las diversas instituciones del Estado, incluyendo la Policía. También, el ambiente de represión que acompañaba las acciones de fuerza contra toda oposición, favoreció la determinación y la acción unitaria de los partidos políticos de diversas tendencias (social-demócrata, democrático-popular, cristianos comprometidos, conservador moderado), y los llevó a reunirse en el seno de la Convergencia Democrática. Esta coalición patriótica, al cuestionar la

legitimidad del gobierno y denunciar sus fechorías, minó la credibilidad de éste en el seno de la población, y estimuló la resistencia ciudadana.

La comunidad internacional, por su lado, particularmente la OEA, al dar seguimiento a las contestaciones ciudadanas, tuvo que promover negociaciones entre las dos partes. Negociaciones laboriosas durante las cuales el secretario general y el secretario general adjunto organizaron más de veinte visitas a Haití. En el transcurso de esta misión, el Consejo de la OEA y la Asamblea General de la institución adoptaron importantes resoluciones que suscribió el gobierno haitiano, pero quedaron en letra muerta debido a la voluntad de éste de imponer sus puntos de vista y descartar todo compromiso.

La dinámica de contestación y de negociación impulsada por la Convergencia condujo gradualmente a la toma de conciencia y a la acción militante de diversos sectores de la sociedad civil. Estudiantes, periodistas, organizaciones de derechos humanos, iglesias, asociaciones de mujeres y del sector empresarial se levantaron para reclamar el respeto de los derechos humanos y de los compromisos contraídos por el Estado haitiano. Así, la oposición se consolidó a pesar de la voluntad de las autoridades de ahogar toda crítica, de manipular a las masas y de amordazar a la prensa. La ciudadanía comenzó a sentirse comprometida y se mostró cada vez más consciente de la naturaleza del mencionado poder y de la utilización por parte de éste de los mecanismos y recursos públicos y, además, de los peores instrumentos de la autocracia así como de potentes redes internacionales ligadas a su participación en el tráfico de drogas.

El Estado mafioso, al presentarse en nombre del pueblo y de la causa popular, se había convertido en un instrumento eficaz del enriquecimiento ilícito, de la impunidad, de la simulación de sus objetivos bajo un velo populista y constitucionalista. Se había dotado de un poder criminal enorme, cada día más distante de la sociedad y opuesto al progreso y a la libertad. De ahí, la dicotomía se volvía cada vez más peligrosa entre ese Estado y la nación. Así, el aparato estatal al servicio de M. Aristide, de los barones de la droga, de los aprovechadores del régimen y de sus aliados haitianos y extranjeros, demostraba que no existía más que un objetivo: garantizar la impunidad, mantener su dominación y perennizarse en el poder.

Frente a esta realidad, la nación, en un proceso difícil de toma de conciencia, de refundación, de replanteamiento de su organización social, comenzaba a definir su proyecto de construcción de las bases materiales correspondientes a su necesidad de desarrollo y de democracia.

El año 2003 se caracterizó por la ampliación e impulso sostenidos de los sectores progresistas. Convergencia Democrática, que reunía a las fuerzas políticas de la oposición, imprimió una orientación unitaria a todos los que obraban a favor del cambio. Constituía, al mismo tiempo, la parte contraria del gobierno en las negociaciones con la comunidad internacional con la intención de lograr un compromiso para encontrar una salida a la crisis.

La acción de Convergencia fue reforzada y renovada por ciudadanos provenientes de la sociedad civil: miles de socios de cooperativas de ahorro, despojados de sus ahorros por timadores oficiales, estudiantes reclamando la autonomía de la Universidad y el derecho de manifestarse, etc. Además, las iglesias apoyaban las reivindicaciones de la población y, de manera general, reclamaban la buena gobernabilidad y el fin de la corrupción. La sociedad civil organizada, bajo el nombre de "Grupo de los 184", emprendió una campaña de participación cívica donde se encontraron los elementos más dinámicos de las instituciones privadas, de los reagrupamientos de universitarios, de las asociaciones de mujeres, de las organizaciones de defensa de derechos humanos, etc. La movilización de estos sectores conllevó al conjunto de la población a manifestarse contra el régimen, con el efecto de exasperar la barbarie de los órganos represivos contra estos activistas y, particularmente, contra los estudiantes universitarios.

Desde entonces, el movimiento cívico, al reagrupar a la sociedad civil y grupos políticos, alcanzó mayor impulso, y dio lugar a manifestaciones que reunían a más de 100 mil personas. Las bases de consenso social se habían encontrado para combatir la dictadura. El esquema y el contenido de la transición a un régimen democrático y de garantía de los derechos humanos se afirmaba, y con este vasto movimiento de la sociedad se desdibujaban las líneas de un proyecto alternativo de carácter republicano que pudiera conducir a la realización de las elecciones.

A principios de 2004, año de celebración de los 200 años de nuestra independencia, tal movilización y el espíritu combativo de la población aparecieron claramente como la expresión de un cambio en proceso. Provocaron el derrumbe del mito de la popularidad absoluta de M. Aristide y demostraron, también, la débil capacidad de convocatoria del líder y del partido oficial. Estos fenómenos políticos conllevaron a la ruptura de la lógica de funcionamiento del sistema basado en la represión, la intimidación, la manipulación y el inmovilismo de los ciudadanos. Éstos, desde entonces, desafían la brutalidad de los policías y otros agentes represivos. El pueblo reclamaba la salida de Aristide, y esta reivindicación pacífica generalizada exasperaba la violencia de la máquina represiva. Toda esta lucha provocaba la desarticulación del sistema.

Era un escenario de derrumbamiento y de implosión de un poder que parecía total y todopoderoso. Favoreció, por lo tanto, la entrada en escena de ciertos sectores armados provenientes de grupos paramilitares al servicio de Aristide en disidencia, sobre todo en la ciudad de Gonaïves, y de elementos del antiguo ejército (desarticulado en 1995) que estaban refugiados en República Dominicana y penetraron al país por la frontera norte.

En el plano internacional, la lucha unitaria de la oposición pacífica y de la sociedad civil, particularmente del "Grupo de los 184", provocó la ruptura del sistema de alianzas subordinadas de M. Aristide con la comunidad internacional. Hasta esta etapa de la resistencia del pueblo y de la violencia represiva, ilimitada y criminal, la mayor parte de los países amigos de Haití, así como la OEA y la CARICOM continuaban apoyando al gobierno y le testimoniaban complacencia sino es que complicidad. Se referían a su "legitimidad" mientras reclamaban el enderezamiento de ciertas prácticas políticas ilegales y el cese de las violaciones a los derechos humanos.

Con la explosión inesperada del movimiento popular y la concertación de tantos sectores sociales que reclamaban la salida de Aristide, la comunidad internacional debió cambiar su fusil de hombro. Por primera vez, durante la segunda quincena de febrero, personajes importantes de esta comunidad se refirieron a la incapacidad del jefe de Estado de garantizar la seguridad de las vidas y los bienes en Haití y también de garantizar la seguridad en la región del Caribe. En consecuencia, la Steele Foundation,

una compañía privada de Estados Unidos que hacía aproximadamente dos años se encargaba de la seguridad de Jean Bertrand Aristide, al no recibir más las garantías de las autoridades de Washington, decidió poner fin a la delicada misión de sus agentes en el Palacio Nacional.

LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA

Los días 1 y 2 de enero de 2004 tuvieron un significado simbólico en el proceso de constitución del consenso histórico de la nación en la búsqueda de la libertad y de una autodefinición conforme a las aspiraciones, a la dignidad humana y al desarrollo económico y social. En esta circunstancia, el pueblo haitiano, aferrado a los valores de la nacionalidad y a una independencia conquistada en condiciones tan heroicas, en vez de celebrar este aniversario, invadió las calles de la capital y de la provincia para decir NO a la dictadura y reclamar la salida del dictador cuya conducta deshonraba a la nación. La Policía y grupos paramilitares atacaron a los manifestantes con una violencia sin igual dejando un saldo de varios muertos y heridos.

En esta ocasión, Plataforma Democrática, coalición política donde se reagruparon las categorías sociales y políticas más diversas, desde estudiantes, asociaciones patronales, sindicatos, organizaciones campesinas, etc., entregó un documento que reclamaba la salida de M. Aristide, al único invitado oficial de alto rango presente en las celebraciones, el presidente de África del Sur, Tabo Mbeki.

El 20 de febrero siguiente, Plataforma Democrática se basaba en el mencionado documento para reiterar las posiciones de la Nación frente a las proposiciones que le eran transmitidas por una delegación internacional de alto rango, compuesta entre otros por el subsecretario de Estado americano Roger Noriega, el ministro canadiense de la Francofonía, Denis Coder, el ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, altos funcionarios de la OEA, la CARICOM y la Unión Europea. A través de esta delegación, la Comunidad Internacional renovaba su apoyo a M. Aristide, jefe de un Estado mafioso, para que se mantuviera en el poder hasta terminar su "mandato", el 7 de febrero de 2006, e invitaba a la oposición a suscribir un

compromiso que incluía, entre otros puntos, la designación de un Primer Ministro de consenso, lo cual fue rechazado por la oposición.

A fin de cuentas, al constatar la firmeza de la oposición y el desmoronamiento del sistema, los socios internacionales debieron reaccionar en el sentido del movimiento general de la sociedad. Aristide fue obligado por la fuerza de las circunstancias a dejar el poder, su derrota política fue evidente ante el rechazo del pueblo.

Así, el documento de Plataforma Democrática reapareció, despojado de ciertos elementos importantes de su contenido. Sirvió de referencia a la nueva institucionalidad precaria y formal sobre la cual la OEA y la embajada de Estados Unidos se basaban después de la salida de Aristide, para reconocer como presidente provisional, según el voto de la Constitución, al presidente de la Corte Suprema, el juez Boniface Alexandre y para la colocación de un Consejo de Sabios de siete miembros, quienes debían contribuir a la designación de un Primer Ministro de consenso y de su gobierno.

De hecho, Haití entraba en otra etapa de su historia. Pero, el impulso de renovación democrática que quiso imprimir el consenso histórico de los días 1 y 2 enero de 2004 a la difícil lucha del pueblo para librarse del despotismo, fue nuevamente desviado, sino es que truncado.

Mientras tanto, desembarcó en el país una fuerza militar multinacional que M. Aristide había solicitado a Naciones Unidas. Esta petición la había realizado también a través de declaraciones públicas. Expresaba así el miedo de ser arrasado por la ola de fondo de la contestación generalizada y su obsesión de quedarse en el Palacio bajo cualquier circunstancia. Esta solicitud oficial fue reiterada por el presidente Boniface Alexandre. Así, mediante esta intervención, se dio un cortocircuito en el proceso inusitado hacia el consenso y la determinación histórica, por lo cual la nación haitiana había emprendido, en la unidad de los diversos sectores progresistas, una verdadera liberación.